

La diplomacia de la Argentina y de las potencias europeas en la época de la independencia hispanoamericana

POR **FERNANDO ENRIQUE BARBA** (*)

El año 1812 fue decisivo para la liberación del suelo español de la ocupación francesa. En efecto, el 22 de julio de 1812 tuvo lugar al sur de Salamanca una de las batallas más importantes de la Guerra de la Independencia española. Napoleón había retirado 27.000 hombres para incorporarlos a la campaña de Rusia y gran parte de las tropas que quedaron en España estaban ocupadas al sur con el sitio y posterior toma de Valencia por el mariscal Suchet. Esta situación fue aprovechada por Arthur Wellesley, duque de Wellington, general jefe del ejército aliado destacado en Portugal, para desencadenar una ofensiva total contra los franceses que duraría buena parte del año.

El 17 de junio ocupó Salamanca y el 22 de julio en las llanuras de Arapiles el ejército de Wellington, compuesto por 48.500 hombres, destrozó al francés de Marmont, formado por 47.000 hombres. La de los Arapiles o de Salamanca fue una de las grandes batallas de la guerra de la liberación española. Previamente las tropas de la coalición habían derrotado, el 21 de junio, a parte del ejército francés en la batalla de Vitoria. Estos triunfos obligaron a José Bonaparte a abandonar el territorio español. Napoleón sufrió una enorme derrota que hacía prever el fin de su hegemonía en Europa.

Muy rápidamente se hicieron sentir las consecuencias, ya que el emperador se vio obligado a reconocer a Fernando VII, mediante el tratado de Valençay del 11 de diciembre, los derechos de aquel al trono español. Esta noticia hizo temer a las colonias americanas que pudieran ser atacadas, en un futuro cercano y luego de la asunción del trono por Fernando, por una flota española en su intento de recuperarlas. Debemos recordar que el rey español recién lo hizo el 20 de marzo de 1814.

(*) Prof. Titular Historia Argentina General e Historia Argentina I. Director del Doctorado de Historia. Director del Centro de Historia Argentina y Americana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia desde el 9 de octubre de 2001. Actualmente vicepresidente 1º y miembro correspondiente de las de España, Perú, Uruguay, Paraguay y otras.

En el caso de nuestro país, la situación se agravaba ante la derrota de las armas nacionales en Vilcapugio, la que hacía presagiar la posible pérdida del Alto Perú con el consiguiente peligro que aquello significaba. Frente a esta situación, el gobierno del Primer Triunvirato creyó oportuno enviar muy prestamente una misión ante Inglaterra; la misma sería llevada a cabo por Manuel de Sarratea.

Sarratea se entrevistó con el cónsul británico en Río de Janeiro, Lord Strangford, con quien trató de conseguir su apoyo a través de concesiones comerciales, a fin de que Inglaterra permitiera, entre otras cosas, la venta de armas por parte de particulares al gobierno de Buenos Aires y además de evitar por parte de los británicos de que las colonias debieran reconocer al Consejo de Regencia de Cádiz.

Sin embargo, bien pronto cambiaría, al menos oficialmente, la posición inglesa. La vuelta de Fernando en forma efectiva al trono español hizo que la posición británica con respecto a las colonias americanas cambiara, al menos oficialmente, y pretendiera no apoyar a los independistas. El 5 de julio de 1814 firmaba un tratado con España estableciendo que, en caso de que ésta abriera el comercio a los extranjeros aseguraba a Inglaterra la posición de nación más favorecida; pocos días más tarde este último país prohibía la venta de armas a los americanos.

Ese cambio de actitud de Inglaterra preocupó aún más al gobierno, que era ejercido por el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, quien se decidió al envío de una nueva misión, ahora frente al rey de España a fin de, luego de pasar por Brasil para entregar documentación a Strangford y de allí rumbo a Londres para que Sarratea los interiorizara de las últimas novedades en el orden de la diplomacia británica y europeas con respecto a las colonias. Como afirma Mario Belgrano: “de allí pasarías a España donde habrían de presentar a Fernando VII las felicitaciones de las Provincias Unidas por su feliz restitución al trono de sus mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor y fidelidad de estos pueblos”. Sin embargo también debían señalar, en términos “aceptables” que estos pueblos estaban dispuestos en caso de no conseguir una salida aceptable, de continuar con la guerra. El verdadero fin de estas gestiones era sin dudas ganar tiempo y prepararse para una guerra contra España que se consideraba inevitable, ya que era sabido por toda la dirigencia que los pueblos no estaban dispuestos a volver a la soberanía de España. Esta gestión, como otras que se hicieron en el período, fracasó (1).

(1) Al respecto véase los trabajos de Belgrano, Mario (1962), “La política externa de los Estados de Europa (1813-1816)”, “La Santa Alianza. Los comisionados al exterior”, en: Academia Nacional de la Historia, *Historia de la Nación Argentina*, t. VI, vol. 1. Buenos Aires: El Ateneo; Pueyrredón, Carlos A. (1962). “Gestiones diplomáticas en América (1815-1817)”, en: Academia Nacional de la Historia, *Historia de la Nación Argentina*, t. VI, vol. 1. Buenos Aires: El Ateneo.

Con respecto a la política europea debe indicarse que si bien el problema que conformaba la emancipación hispanoamericana se planteó en el concierto del orden internacional, antes de 1815, fue después de la caída de Napoleón cuando se convirtió en una candente preocupación, trascendiendo más allá del campo de batalla y de la misma España. Finalizadas las guerras napoleónicas, y ante los perentorios reclamos de España y los principios de restitución y legalidad sostenidos por la Santa Alianza, las cancillerías europeas tuvieron que tratar el problema.

Los intereses de las potencias fueron, desde el comienzo, diferentes y contradictorios. Inglaterra condicionó su mediación en el conflicto en la medida que ella no afectara su política colonialista. Calculando sus intereses en estas latitudes, y aprovechando que su potencial marítimo bregara por conseguir la apertura de América al comercio internacional. En esto se encontró respaldada por los Estados Unidos. Ambos países unían el interés comercial y el político, tratando de evitar la dominación de otra potencia europea, salvo España, en América; evitando de esta manera la posible competencia económica. Aunque luego surgirán y desenvolverán las contradicciones y la competencia económica entre ambos, en ese instante Estados Unidos e Inglaterra aparecen como un frente político-económico ante las pretensiones europeas.

En cuanto a las potencias netamente continentales, como Francia, Rusia, Prusia y Austria, trataron, desde un comienzo de restituir las excolonias a España. Cuando advirtieron la imposibilidad de que esto sucediera pensaron en instalar monarquías en América con príncipes europeos o en aconsejar a España el reconocimiento de la independencia. Con esa política esperaban que la última podría conservar en sus antiguas colonias ventajas de tipo económico sobre los otros países europeos.

Durante más de una década, las cancillerías europeas y americanas intercambiaban proposiciones y notas tratando de dar una solución al problema buscando una posición conciliable entre los más variados intereses. Sus gestiones, sin embargo, se encontrarán entorpecidas en primer término por la irreductible posición de Fernando VII, rey de España, quien, al no comprender la situación americana y al no percatarse de la incapacidad económica y militar de su país para reconquistar América, como ambicionaba, aceleró el reconocimiento de la independencia por parte de los Estados Unidos e Inglaterra perdiendo, además, la posibilidad de ser reconocida, desde el punto de vista comercial, como la nación más favorecida.

I.

Para las grandes potencias europeas: Inglaterra, Francia, Austria, Prusia y Rusia, el problema de la emancipación americana cobró plena vigencia a partir de 1816. En 1815 España había apelado a los aliados pero estos sólo se interesaron por el

problema cuando los portugueses ocuparon Montevideo. Para mantener la paz europea, las potencias tratarían que se devolviera la Banda Oriental. Además España realizó insistentes reclamos para que las potencias intervinieran como mediadoras entre Madrid e Hispanoamérica.

Es por esta época (1815-1816) cuando nace la rivalidad anglo-rusa respecto a la política que deberá adoptarse en relación con las naciones americanas. La inglesa consistirá en eliminar a cualquier país en la política atlántica, al tiempo que Rusia bregará para que las resoluciones y la posible mediación se hagan dentro de seno de la Santa Alianza.

Inglaterra había ofrecido a España su mediación sobre la base de un plan que abarcaba todas las colonias y se apoyaba en una amnistía general y la libertad de comercio con todas las naciones, reservando algunas ventajas para la Madre Patria; dando también a los americanos participación en los empleos públicos. Punto esencial era el de la sumisión de los revolucionarios a España, pero esta sumisión no sería perpetua. “Lo más que podía esperarse era un acomodo que asegurase ese objeto y la paz durante quince años”. Por último, este pacto debía ser garantizado por todas potencias (Manning, 1932: 1634).

Inglaterra no pedía ningún privilegio especial, pero al solicitar a España que concediera un intercambio liberal entre América y el resto de las naciones, se estaba asegurando de antemano una enorme participación en el comercio americano, ya que su flota comercial era, sin duda alguna, la dueña de los mares, respaldada firmemente en su tráfico por el Almirantazgo.

Pese a esto, algunos estadistas preveían, en un libre juego comercial con América del Sur, más que ventajas, perjuicios indirectos, descontando que dicho movimiento tendería a fomentar los intereses comerciales de los Estados Unidos. La verdad es que este temor carecía de fundamentos serios, pues el potencial económico británico era inmensamente superior al norteamericano (Manning, 1932: 1703).

El proyecto de mediación pasado por Inglaterra a España fue girado a Rusia, Francia, Austria y Prusia, pidiéndoles una colaboración en el intento formulado por la primera, el emperador ruso aprobaba en forma general el plan, estimando necesario esperar el resultado de la mediación de los asuntos entre España y Portugal antes que se abriesen las conferencias sobre el asunto. La respuesta de España no fue decisiva, tampoco podía alentar muchas esperanzas el intransigente Fernando VII, quien no se mostraba muy dispuesto a conceder franquicias liberales a sus excolonias.

Ante tal situación, Inglaterra siguió sosteniendo el principio de neutralidad, que se manifestó en el reconocimiento de la independencia de las nuevas naciones,

aunque no llegó al extremo de prohibir el comercio entre la Isla y América, ya que según manifestaba Lord Castlereagh “España no tenía. El derecho de pedirnos semejante cosa” (Manning, 1932: 1706, T. III).

Los Estados Unidos sostenían también el principio de neutralidad en la guerra que España mantenía con sus excolonias: pero, estando sus intereses íntimamente relacionados con la emancipación americana, esta neutralidad tuvo características muy especiales. Si bien el gobierno no prestó colaboración directa a los revolucionarios, tampoco les impidió que realizaran un intercambio comercial con su país. Sus puertos permanecieron abiertos a todas las naves sin distinción de pabellón, con la única exigencia del pago de los derechos pertinentes y la obediencia de las leyes mientras se encontrasen bajo jurisdicción.

Además negaba a España el derecho de extradición, ya que no había ningún tratado al respecto y tampoco podían castigar a nadie por delitos cometidos fuera de su territorio (Manning, 1932: 52, T. I). Los Estados Unidos no estaban dispuestos a perseguir a los hispanoamericanos y menos a interponerse en su revolución, antes bien, continuaron prestando su colaboración en forma indirecta.

Fue también evidente que los Estados Unidos se opondrían abiertamente a cualquier intervención europea en América. Incluso, estadistas como Henry Clay destacaban que la independencia de América del Sur encerraba para su país un beneficio bien definido y ante los principios de legitimidad propuestos por el Congreso de Viena sugirió la necesidad de mantener un ejército para proteger los intereses americanos (Craine, 1961: 107), a pesar de que en esa época –1816– se consideraba remota la posibilidad de una intervención armada europea.

En abril de 1817, con el propósito de obtener datos precisos sobre el estado político y económico de los principales estados sudamericanos, el presidente James Monroe decidió enviar agentes que fueron los futuros cónsules en Buenos Aires: Cesar A. Rodney y John Graham; como secretario viajó Henry M. Brackenridge. Más tarde se les unió Theodorick Bland como tercer comisionado. Estos debían viajar a lo largo de la costa sudamericana y llegar primero hasta el Río de la Plata, tocando Buenos Aires y Montevideo, para luego ir a Río de Janeiro. Si era posible, se extenderían hasta San Salvador y Pernambuco y de allí pondrían rumbo al Mar Caribe, tocando puertos como Cumaná, Cartagena, Caracas y otros lugares que pudieran llegar a convertirse en importantes centros comerciales. Los puntos más destacados de las instrucciones consistían en informar sobre las formas de gobierno, la población y recursos pecuniarios; asimismo tenían que interesarse en conocer la organización y extensión de las fuerzas militares de las partes contendientes. Otro aspecto sobre el que deberían comunicar era la actitud imperante entre las autoridades públicas y la población hacia los Estados Unidos y las grandes poten-

cias europeas así como la probabilidad de relaciones comerciales o de otra clase ya establecidas. Con esta misión se iba más allá del campo económico, ya que los gastos solicitados servirían para fundamentar la acción del gobierno en caso de que éste se decidiera a reconocer la independencia de aquéllos.

En 1817, Rusia, que se hallaba íntimamente relacionada con España ejerciendo gran influencia en su gabinete, ofreció su mediación en el conflicto colonial. Parecía incluso que iba a realizar la venta real o figurada de una flota con el propósito, en caso de no concretarse la mediación, de que Fernando VII pudiera enviarla a América en su intento de reconquistarla, pero esto, a su vez, demostraba que el emperador no pensaba intervenir directamente en el conflicto (Manning, 1932: 2214, T. III).

Parecieron entonces infundados los temores de una posible participación rusa en el conflicto que se había suscitado en Florida entre los Estados Unidos y España luego de la toma de Pensacola por el general Jackson. Rusia prefirió postergar el tratamiento del problema colonial hasta la reunión del Congreso General en Aix-la-Chapelle, al que concurrió decidida a apoyar los intereses españoles y evitar la difusión de las ideas republicanas en América.

En cuanto a la posible expedición que se preparaba en Cádiz, el ministro norteamericano en Madrid, George Erving manifestó en febrero de 1818, que los rusos habían entregado a España la flota y los cañones en buen estado, pero el equipo y las provisiones debían ser suministradas por la última aunque esto difícilmente pudiera realizarse, ya que el tesoro estaba exhausto. Según su opinión, el escuadrón no podía salir nunca. En caso de que no fuera así y pudiera zarpar, su destino más probable sería Buenos Aires.

II.

En 1818 se reunió en Aix-la-Chapelle (Aquisgram) el Congreso General de soberanos que debía tratar los múltiples problemas europeos, como el fin de la ocupación de Francia y el problema de límites entre España y Portugal. También se trataría la cuestión sudamericana, ya que la solución de ésta era necesaria para el definitivo restablecimiento del orden alterado desde la época napoleónica.

Si bien Rusia propuso la participación de España en las conferencias, halló firme resistencia porque, ante su intervención, el Congreso se vería obligado a pronunciarse sobre la mediación de las potencias en el conflicto americano y sobre los asuntos de límites en la Florida.

Como para solucionar el litigio de Florida se hacía necesaria la participación de los Estados Unidos, Prusia propuso que dicha nación concurriera a Aquisgram.

Pretendía además que ésta se ligara con los acuerdos de las potencias, impidiendo así el apoyo y el reconocimiento de las nuevas naciones sudamericanas (Kossok, 1965: 7). En esto encontró la firme oposición de Inglaterra, secundada por España, porque temía que el predominio político-económico de los Estados Unidos se acrecentara aún más.

En mayo de 1818, el duque de Fernán Núñez, que por entonces lo era Carlos José Gutiérrez de los Ríos, le escribía desde París a José García León diciendo que excluir a España del Congreso era atentar contra la libertad y que “nos quieren reducir a recibir la ley que quieren dictar como si fuésemos Potencia de Segundo Orden pues si esta reunión de la que somos excluidos es humillante en el día, no es de poca consecuencia los resultados que preveo para más adelante” (2).

De esta manera, las conferencias se realizaron sin la participación de los Estados Unidos y España. El tema americano fue ampliamente discutido, y el Congreso decidió que las cinco potencias intervinieran como mediadoras en Madrid. Inglaterra, descontando el apoyo de Austria y de Prusia, fijó su posición declarando, en noviembre de 1818, que sólo participaría en la mediación bajo la expresa reserva de que no se utilizaría la fuerza.

Al enterarse de esta posición el embajador español informó a los ministros de Austria y Prusia que su Rey no aceptaría la mediación en tales condiciones y por lo tanto renunciaba a ella. Según el ministro norteamericano en París, Albert Gallatin, había “poca duda de la verdad del hecho principal que no habrá mediación y de que Inglaterra ha maquinado para derrotarla”. Una vez más se ponía en evidencia la intención inglesa de asegurarse el mercado colonial evitando toda participación de las naciones europeas en América.

El obstáculo insuperable que se les presentó a las potencias fue la intransigencia española. Los embajadores no ignoraban que los proyectos de mediación pacífica, presentados unos y aceptados otros por España, no habían constituido más que un recurso utilizado por esta a la espera de ganar tiempo para preparar la intervención armada. Fue por eso que no encontró en el Congreso ningún país que le diera su decidido apoyo: “Esa impopularidad de un rey entre reyes, este solecismo político rápidamente produce otro”.

Hubo también otro factor que jugó importante papel en la acción de los congresistas. Pese a que los Estados Unidos no estuvieron en Aquisgram, debió tenerse en cuenta su posición, manifestada a Lord Castlereagh antes de reunirse el Congreso. Consistía en la decisión tomada de no aceptar ningún plan para solucionar

(2) Archivo General de Indias, Sección IX, Legajo 16 N° 937.

la guerra colonial que no considerase como punto fundamental la independencia absoluta de las colonias. La posición norteamericana “(...) puede hasta justificar los medios, en conexión con otras causas, de producir sentimientos más bondadosos en ellos para con los patriotas, no ciertamente por simpatía por su causa, *sino por el temor de sus consecuencias*” (Manning, 1932: 1654, 1724, T. III). Los europeos tomaron así conciencia de que una nueva potencia comenzaba a influir en las decisiones internacionales y a la que desde ese momento no podían ignorar.

En Aquisgram también se había considerado la posibilidad de enviar a América, “ante la mostrada incapacidad de las colonias para gobernarse”. Según palabras de Richelieu, un príncipe de la familia de los Borbones para que construyera un reino independiente y que fuera consecuente con las miras de las potencias.

Sin embargo, en octubre de 1818 el ministro ruso Pozzo di Borgo consideraba este proyecto como quimérico, pues estaba enterado de que los americanos se negarían rotundamente a aceptar un príncipe español. Ante el ya evidente fracaso de las negociaciones respecto a la posible participación de las potencias en la pacificación de las colonias, España informó al zar Alejandro que no aceptaría la mediación. Castlereagh informaba en noviembre de 1818 que había consenso general de que no se iba a emplear la fuerza contra las colonias americanas y que España debería otorgar a las colonias sudamericanas “las ventajas en toda su amplitud que los mediadores serían autorizados a proponer a las Provincias insurgentes” (Webster, 1944: 76, y II).

III.

Ante el rechazo de la mediación por parte de España y la posible salida de la escuadra alistada en Cádiz, Inglaterra propuso a la primera, en enero de 1819, por intermedio de lord Wellington, que renovara la solicitud para una mediación. Propuso también a los aliados que la determinación de no emplear la fuerza en América fuese puesta por escrito en la declaración de mediación. Rusia y Francia, que en el problema colonial actuaron unidas, dijeron que en caso de aceptar aquellos puntos, los aliados debían comprometerse también a no sostener ningún tipo de relación política o comercial con las colonias que rechazaran los puntos que fueran convenidos en definitiva por los mediadores. Inglaterra no lo aceptó y el proyecto fracasó.

Si bien Rusia se oponía abiertamente a la separación definitiva de las colonias de España, y por consiguiente rechazaba la posibilidad del reconocimiento de su independencia por parte de los Estados Unidos, tampoco pensaba hacer nada para poner fin a la lucha colonial, ya que la conducta de Fernando VII no fue la requerida durante las conferencias.

Desde este momento y ante la falta de flexibilidad por parte de España, Alejandro perdió gran parte del interés que anteriormente había mostrado por este problema. Lo demuestra el hecho de que antes de clausurarse el Congreso de Aquisgram, el emperador había ordenado el alistamiento de doce navíos de línea para el eventual apoyo a la expedición de Cádiz; pero poco después de su regreso a Moscú, revocó sus instrucciones.

En tanto, Fernando VII, pese a no encontrar apoyo en ninguna de las potencias, continuó con su intento de intervención armada.

En enero de 1819 se sospechaba que el destino de la escuadra era Buenos Aires, como mejor modo de impedir la invasión que se preparaba contra los realistas del Perú pensando que con la caída de la capital del Plata, considerada como el foco de la revolución, sus provincias interiores, como las de Chile, volverían a la soberanía española (Manning, 1932: 1655, T. II). Ciego de orgullo, tan solo igualado por su pobreza, Fernando VII no advertía que para los intereses de España nada era mejor, en esas circunstancias, que aceptar la mediación propuesta en Aquisgram. Esto le permitiría mantener relaciones amistosas con sus excolonias y adquirir, acaso, el derecho de nación más privilegiada en sus relaciones comerciales. Tampoco alcanzaba a comprender que de continuar en su postura las convertiría en sus peores enemigos.

Asegurada la independencia sudamericana por la negativa de Inglaterra a la intervención armada, Monroe comprendió claramente que los nuevos gobiernos deberían ser reconocidos, en un futuro no muy lejano, por los Estados Unidos, y en previsión de tal política requirió informes de sus embajadores. En general las respuestas coincidieron en que no era improbable que tal medida suscitara protestas y hasta rechazos, pero que era muy difícil que las potencias tomaran una actitud enérgica contra su país. El ministro Rush informó, el 20 de noviembre de 1818, lo siguiente: “Bastará con que repita con creciente confianza la creencia que hasta ahora he expresado de que la Gran Bretaña no considera en sí mismo como causa de guerra nuestro reconocimiento de la independencia de las colonias”. Estos informes fueron los que alentaron a los Estados Unidos a realizar una política más audaz con respecto a Hispanoamérica (Craine, 1961: 113). Además en aquel país se sabía que la posición de Inglaterra consistía en el reconocimiento de la independencia americana, pese a que en esos momentos retardaba e incluso desalentaba esa política a la espera del momento oportuno.

Sin embargo, Adams escribía a Rush el 19 de enero de 1819 indicándole que manifestara a lord Castlereagh que Monroe esperaba que las diferencias en sus opiniones fueran más de forma que de fondo. Decía más adelante “(...) que el Presidente está considerando el otorgamiento de ese Exequatur o el reconocimiento

del Gobierno de Buenos Aires en no lejano tiempo al menos que no ocurra algún suceso que justifique un nuevo retardo de esa intención”.

Lord Castlereagh se enteró de esto el 12 de febrero, en una conferencia que mantuvo con Richard Rush, a quien le dijo que el gobierno inglés nunca había querido impresionar como si estuviera dispuesto a reconocer la independencia hispanoamericana; antes bien, siempre había deseado la restauración de España, aunque no podía dejar de admitir que Buenos Aires estaba en mejores condiciones para realizar una vida independiente que las demás regiones. También tuvo que admitir que las perspectivas comerciales que se le abrían a los Estados Unidos en el Río de la Plata eran inmejorables, especialmente para la venta de pertrechos navales, naves y maderas de todo tipo.

La posición inglesa y la caída del director Pueyrredón en Buenos Aires, que hasta ese momento era de nuestros gobiernos el que más estabilidad había mostrado, sirvieron de justificativos que dilataron el reconocimiento.

Otro factor que quizás influyó para que se abandonara por el momento la idea del reconocimiento diplomático, fueron los informes que representaron los comisionados especiales Rodney, Graham y Bland. Como no encontraron forma de ponerse de acuerdo en varios puntos, redactaron sus respectivos informes por separado. Aunque todos eran partidarios y fervientes simpatizantes de los revolucionarios, dejaron traslucir cierto desengaño en cuanto a la situación política imperante. Bland afirmaba que el reconocimiento de Buenos Aires y Chile era en ese instante inconveniente. Los otros comisionados y Henry Brackenridge pasaron informes más optimistas. El gobierno tuvo que consultar entonces a Joel Roberts Poinsett, agente especial en Chile durante 1817, quien apoyó la posición de Theodore Bland.

IV.

Los años de 1820 y 1821 se caracterizaron por una escasa actividad en lo relativo al reconocimiento de la independencia sudamericana. Es que uno de los principales actores, los Estados Unidos, debía resolver un serio problema antes de seguir adelante. Efectivamente, desde hacía un cuarto de siglo aproximadamente, estaba en litigio con España por las provincias de Florida. Por su parte, las potencias europeas se mantuvieron a la expectativa esperando el desenlace.

Luego de la intervención del general Jackson en aquella región, España tuvo que reconocer que era inútil seguir reteniéndola y que finalmente caería bajo la soberanía norteamericana. Por intermedio de Luis de Onís, comenzaron las tratativas para deshacerse de la Florida. El 25 de febrero de 1819, los Estados Unidos recibie-

ron Florida, haciéndose cargo de las reclamaciones de algunos ciudadanos suyos contra España. Sin embargo, la ratificación por la parte española se hizo esperar casi dos años. Se realizó el 24 de octubre de 1820 y se dio a conocer en los Estados Unidos el 22 de febrero del año siguiente.

España había propuesto, para ratificar el tratado de febrero de 1819, que los Estados Unidos se abstuvieran de reconocer la independencia de las naciones sudamericanas, e incluso se les pedía que no mantuviera relaciones de ningún tipo. Si bien Monroe no aceptó esto, tuvo que cuidar que su política, en relación con los sudamericanos, conspirara lo menos posible contra los intereses españoles. No podía dar un paso en falso y comprometer una política que parecía estar a punto de dar sus frutos después de veinticinco años de espera. Antes que los intereses sudamericanos, debía velar por los de su país. Estaba persuadido, por otra parte, que la independencia sudamericana era sólo cuestión de tiempo.

A pesar de que a medida que transcurría el tiempo la opinión pública de los Estados Unidos se pronunciaba en forma inequívoca a favor del reconocimiento de la independencia, la prudente política de Monroe demoró esa impaciencia. Un ejemplo de la presión a favor del reconocimiento nos lo da Henry M. Brackenridge, que en su “Carta sobre, los asuntos de América del Sur, por un americano”, a James Monroe, presidente de los Estados Unidos, decía: “(...) que un pueblo que puede defenderse durante diez años, será capaz de defenderse siempre”.

Más adelante continuaba: “Hay otra consideración digna de atención. Puede haber en muchas cosas, un interés común americano continental, en oposición al interés europeo”. Y completaba: “La independencia americana de Europa (...) es la primera gran meta a alcanzarse” (Brackenridge, 1927: 219, 234).

Pero como hemos dicho, el gobierno norteamericano no quería apresuramientos. Por tal razón, la principal característica de su accionar será la de dar apoyo a los sudamericanos sin llegar a comprometerse en una guerra con Europa, de la que Monroe estaba “(...) convencido de que, en caso de que hubiésemos ido a la guerra junto con ellos, les habríamos hecho más mal que bien, porque hubiésemos lanzado a toda Europa contra ellos para no hablar del daño que nos hubiéramos hecho a nosotros mismos” (Cresson, 1943: 407).

Su política se limitó entonces a dar a los sudamericanos todas las ventajas del reconocimiento sin el riesgo que este representaba. No es de presumir que Monroe pensara que los europeos se uniesen para intervenir en América, pero era una buena excusa para enfriar el ánimo del público norteamericano y asegurarse así la cesión definitiva de Florida.

Esta posición cautelosa de Estados Unidos, que pronto cambiaría, fue la que caracterizó el año 1821 –incluso luego de la ratificación definitiva del Tratado de Florida–. La causa del cambio debe buscarse en los triunfos alcanzados por San Martín y Bolívar en ese mismo año.

San Martín, luego de asegurar la independencia de Chile con el triunfo de Maipú (5 de abril de 1818), partió con su ejército rumbo a Lima, capital del virreinato del Perú, último reducto español de importancia en Sudamérica, donde arribó por mar, debiendo el virrey abandonar la ciudad. Así, el 28 de julio de 1821 declaró la independencia del Perú en momentos que Bolívar incorporaba el Ecuador a la Gran Colombia. Después de esto, los realistas se hicieron fuertes en el interior sin representar ya ningún peligro para la independencia sudamericana.

V.

Asegurada definitivamente la Florida y la independencia de las repúblicas sudamericanas, y urgido por los representantes, el presidente Monroe envió, el 8 de marzo de 1822, un mensaje al Congreso pidiéndole el reconocimiento de los nuevos gobiernos y el envío de los ministros respectivos.

Luego de hacer una reseña de las relaciones que hasta ese momento habían mantenido los Estados Unidos y Sudamérica agregaba que “esta contienda ha llegado ahora a tal estado y sido coronada con tan decisivo éxito por parte de las provincias, que merece la más profunda consideración cuanto a sí tienen pleno derecho al rango de naciones independientes con todas las ventajas anexas a él en sus relaciones con los Estados Unidos” (Manning, 1932: 170, T. I).

Considerando que “no existe la más remota posibilidad” de que se les pudiera privar de la independencia, “los nuevos Gobiernos tienen derecho a ser reconocidos por otras potencias, derecho que no puede rehusárselas”. El reconocimiento no implicaba la ruptura de relaciones con España y otros países de Europa, ya que los Estados Unidos aun cuando continuara la guerra, seguirían manteniéndose neutrales.

El 19 de marzo la Cámara de Representantes dio una comunicación en la que sostenía, igual que Monroe, que las excolonias eran realmente independientes; en cuanto al derecho de los Estados Unidos a reconocerlas como tales estaba basado en la situación imperante, ya que “la pregunta de quién es el soberano Legítimo no les es permitida a las naciones extranjeras, las cuales son competentes para tratar con los poderes que existen”.

Además, consideraba que ninguna nación europea, excepto España, se había opuesto por las armas a la emancipación de América, por lo que el reconocimien-

to debía satisfacerles, y en cuanto a las naciones que habían permanecido indiferentes ante el problema entendía que el reconocimiento no podía resultarles ofensivo. Señalaba, por último, que el acto del reconocimiento no afectaba los derechos de España ni perjudicaba los medios que dispusiera para realizar su política americana. Atento a estas consideraciones, resolvió reconocer la independencia de los nuevos gobiernos y dar al presidente los medios económicos para acreditar ministros ante aquellos. Así, fueron reconocidos los de la Gran Colombia, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y Méjico. Este acto era la ratificación del hecho ya cumplido.

La reacción española, como era previsible, no se hizo esperar. El 9 de marzo, al día siguiente del mensaje de Monroe, el ministro español en los Estados Unidos, Joaquín de Andurza, protestaba violentamente, a la vez que sorprendido, ya que nadie “podría persuadirse que en pago de la cesión de sus más importantes provincias (...) se reconozca la insurrección de las posesiones ultramarinas de España”. Afirmaba que en América continuaba la insurrección y el desgobierno, reservándose España el derecho de emplear cuantos medios estuviesen a su alcance para reducirla de nuevo a su obediencia. Estados Unidos respondió que la medida era el mero reconocimiento de hechos existentes y que ejercitaba el derecho de toda nación independiente en sus relaciones con los demás países.

Rusia no pareció muy sorprendida por esta medida. El ministro norteamericano Middleton manifestó a los funcionarios rusos que su país había tomado la decisión luego de considerarlo perfectamente y que la razón por la cual su gobierno era el primero que daba ese paso derivaba de la posición geográfica y comercial de los Estados Unidos. Middleton informó que si bien no se le contestó nada en concreto, pudo vislumbrar sin embargo, que Rusia estaba de acuerdo con sus observaciones y que el prestigio de los Estados Unidos no había sufrido desmedro.

En Francia el reconocimiento resultó algo inesperado, pero en general fue bien recibido, especialmente por la clase comercial.

En las potencias marítimas de segundo orden, como los Países Bajos y varios Estados alemanes, también los comerciantes se alegraron por el paso dado por los Estados Unidos (Manning, 1932: 2405, 2427, 1662; T. III).

Algunos de esos estados trataron el tema del reconocimiento de las nuevas naciones, Hannover, por ejemplo, alarmado por el *Manifiesto* dado por Francisco A. Zea, ministro de la Gran Colombia, en el que se decía que se cerrarían los puertos a aquellas naciones que no reconocieron la independencia de su país. Pero temiendo la intervención política de la Santa Alianza, se abstuvieron de dar aquel paso en forma oficial (Kossok, 1965: 10).

Donde el reconocimiento alcanzó mayor repercusión fue en Inglaterra. Al día siguiente de haber llegado la noticia, el valor de los títulos del empréstito colombiano subió en el mercado de Londres. En ningún lado se escuchó una sola queja, y el 23 de abril los comerciantes, navieros y fabricantes de la ciudad se reunieron con el fin de fomentar el tráfico con los nuevos gobiernos y solicitar que sus buques fueran admitidos en Inglaterra como naves de gobiernos independientes; no como hasta el momento, que eran admitidos como cualquier otra embarcación, que se colocara, mientras estuviera en aguas jurisdiccionales, bajo sus leyes.

La opinión inglesa, con sus comerciantes a la cabeza, pedía al gobierno que siguiera los pasos de los Estados Unidos. A tal grado se había llegado, que las naciones sudamericanas eran ya miradas como independientes. Pero Inglaterra estaba trabada por compromisos y por el deseo de que España fuera la primera nación europea que reconociera a los sudamericanos. España había manifestado que sería afectada en sus intereses y derechos si otras naciones seguían a los Estados Unidos. Según lord Londonberry, Inglaterra tampoco podía hacerlo sin la colaboración de Francia, y ésta no estaba preparada para prestarla.

Cuando en junio Zea dio a conocer su *Manifiesto*, los comerciantes ingleses se alarmaron e hicieron un petitorio en el que resaltaba la firma de Baring y Barclay. En él se reclamaba el pronto reconocimiento de los sudamericanos. Ante esto, Castlereagh decidió insertar en el Acta de Navegación un artículo reconociendo los pabellones de Sudamérica, siendo esto un reconocimiento *de facto* y el primer paso al reconocimiento total (Webster, 1944: 23).

VI.

Otro hecho importante sucedió en 1822. En octubre de ese año se reunió en Verona un Congreso del que participaron todas las potencias europeas. Como tema principal se trataría el del régimen constitucional español y la posible intervención armada con el propósito de restaurar a Fernando VII como monarca absoluto. El sucesor de Castlereagh, George Canning, concurrió a esta reunión porque, pese a ser hostil a toda intervención, quería evitar que Rusia planteara la cuestión de las colonias españolas, iniciativa que deseaba reservar a su país.

Contra la opinión de Inglaterra se preparó la intervención en España constituyéndose Francia en el instrumento de esta política. En marzo de 1823 las tropas francesas, unos 20.000 hombres, al mando del duque de Angulema, penetraron en España, ocuparon Madrid y finalizaron su fulminante campaña de Cádiz, lugar a donde había sido llevado el rey. Dos fueron los resultados inmediatos de la intervención: la restauración de Fernando VII como monarca absoluto y el dis-

tanciamiento de Inglaterra de las potencias continentales, acercándose desde ese momento a los Estados Unidos.

Como consecuencia de su decisión de intervenir en los asuntos de América, Inglaterra, en diciembre de 1822, resolvió enviar dos agentes comerciales a las nuevas naciones americanas, con un “carácter consular” (Webster, 1944: 533).

Aparentemente, este Congreso tenía un alcance limitado al ámbito europeo, por la política que en él se desarrolló, de restauración absolutista; pero alentados los monarcas europeos por la débil oposición mostrada por Inglaterra en época de Castlereagh –Congresos de Troppau y Laybach–, pretendieron, luego de su victoriosa intervención en Nápoles, hacer lo mismo en América.

En las negociaciones que precedieron a la invasión francesa a España, el embajador británico en París reafirmó la posición inglesa sobre el problema de América al decir que el tiempo y las circunstancias habían decidido la: separación de las colonias de la madre patria y que el reconocimiento formal de esos Estados por parte de Inglaterra era sólo cuestión de tiempo. Declaró, además, que S.M. británica no pensaba apoderarse de ningún territorio americano y que había conseguido la seguridad, por parte de Francia, de que esta, luego de su intervención en España, no intentaría apoderarse de territorios, ya fuera por cesión española o por conquista.

En previsión de que esto ocurriera, en el supuesto de que Francia olvidara su promesa, Canning inició, en agosto de 1823, un acercamiento con el ministro norteamericano Richard Rush con el propósito de llevar a cabo una acción conjunta que evitara la regresión a los sudamericanos. Es éste el instante en el que Canning comenzó a sincerarse con Rush (19 de agosto), quien, al no tener instrucciones al respecto evitó una respuesta definitiva. Al día siguiente, 20 de agosto, Canning le envió una nota muy confidencial diciéndole:

“Antes de ausentarme de la ciudad deseo Presentarle en forma más clara, aún cuando todavía con carácter privado y confidencial, la cuestión que brevemente discutimos la vez que tuve el placer de verlo”. “No ha llegado ya el momento en que nuestros gobiernos respectivos puedan comprenderse mutuamente en lo que se refiere a las Colonias Españolas en América? Y si podemos llegar a ese acuerdo, no sería conveniente para nosotros y beneficio para todo el mundo que los principios del mismo sean claramente establecidos, y francamente declarados?”

Señalaba luego el pensamiento y la posición de Inglaterra en la emergencia. Opinaba que a la sazón resultaba empresa imposible para España recuperar América. Que si bien el reconocimiento de la independencia era una cuestión de tiempo y

de circunstancias, Inglaterra no pensaba oponerse a una reconciliación entre España y sus colonias, Agregaba que su país no pretendía territorio alguno, pero que *tampoco vería con agrado que fuese transferido* a alguna potencia. Con esto reafirmaba su posición de no permitir que la Santa Alianza interviniera en América. “Si hay alguna potencia europea que acaricie otros proyectos, que se proponga una empresa de fuerza para subyugar las Colonias en beneficio o en nombre de España o que medite la adquisición para sí de cualquiera arte de las mismas por medio de cesión o de conquista, esa declaración por parte de su gobierno y el nuestro sería al mismo tiempo el modo más eficaz y menos ofensivo de insinuar nuestra mutua desaprobación de tales proyectos” (Manning, 1932: 1760).

El 23 de agosto Rush respondió a Canning, coincidiendo en todos los puntos presentados por el inglés, y afirmaba que la intervención europea en América sería mirada como algo “altamente injusto y fructífero en consecuencias desastrosas. Ese mismo día Rush recibió otra nota de Canning en la que decía tener la certidumbre de que tan pronto como terminara la guerra en España y realizadas los objetivos de la misma, se reuniría un Congreso para tratar los problemas de América. Sin embargo, Rush condicionó su apoyo al reconocimiento británico de la independencia de las naciones sudamericanas. Canning no se apresuraba a dar este paso, pues su primer interés consistía en evitar la instalación de Francia en América. La ruptura con la Santa Alianza provenía no del temor a la intervención en sí, sino de la inquietud de que Francia u otra potencia llegaran a amenazar el imperio comercial, sobre el que conservaba celosa vigilancia. Es que a medida que el poder español declinaba, el comercio de exportación inglés hacia Hispamérica aumentaba, como se observa en los siguientes datos cuyos valores son en libras esterlinas. El comercio con Buenos Aires era de 441.586 en 1814 y en 1822 de 1.232.050; con Brasil en 1814 de 1.612.166 mientras que en 1822 alcanzaba 1.919.496; con Méjico por su parte y en las mismas fechas era de 299.870 y de 385.19 (Humpreys, 1940: 344-347).

El ministro inglés se dio cuenta de que por el momento, y en tanto su país no realizara el reconocimiento, no podía contar con los Estados Unidos. Se decidió entonces a actuar solo y en consecuencia, mantuvo, a partir del 9 de octubre de 1823 y hasta el 12 del mismo mes y año, conferencias con el representante de Francia, príncipe de Polignac.

Canning manifestó a Polignac que Inglaterra consideraba imposible el intento de poner a América bajo la dependencia española y que cualquier intervención extranjera apresuraría el reconocimiento inglés. Gran Bretaña no quería precipitar el reconocimiento con el propósito de darle a España la posibilidad de hacerlo; tampoco pensaba demorarlo indefinidamente, ya que no podía consentir que su reconocimiento fuera dependiente del español. Además Inglaterra consideraba de justicia que España obtuviera privilegios comerciales en caso de reconocer la

independencia, dándose por satisfecha con ser colocada en un plano de igualdad con las demás naciones.

Polignac señaló que Francia tenía una posición análoga a la de Inglaterra en el sentido de que no pensaba intervenir ni apoyar a España para reconquistar a América y que sólo quería conseguir una situación comercial similar a la inglesa. Deseaba, además, organizar un Congreso para tratar los problemas americanos con la participación de Inglaterra. Canning observó que un Congreso europeo no debía decidir sobre naciones que estaban tan alejadas, y cumpliendo lo prometido a Rush, dijo que era necesario que los Estados Unidos participaran en las conferencias.

Estas conferencias, mantenidas entre ambos ministros, encierran suma importancia, porque antes de la declaración Monroe, George Canning había obtenido de Francia la declaración de que no intervendría en América, advirtiéndole además, contra cualquier intento de intervención armada.

Mientras tanto, el 9 de octubre se enteraban, en los Estados Unidos, de las propuestas que en agosto había formulado Canning a Rush. Monroe consultó con Madison y Jefferson coincidiendo en que era el momento de abandonar la tradicional política de aislamiento y de unirse a Inglaterra.

Dominaba en el gabinete norteamericano la opinión, equivocada por cierto, de que los aliados, luego de la toma de Cádiz, se aprestaban a intervenir en América. Aumentaba esta presunción la nota recibida el 16 de octubre, dirigida por el ministro ruso, Barón de Tuyl, concebida en estos términos:

“Habiendo sido informado el Emperador, Mi Augusto Señor que la Regencia Republicana de Colombia había nombrado agentes diplomáticos ante diferentes cortes europeas y que el General de División d’Evreux había recibido un desuno semejante para San Petersburgo, Su Majestad Imperial le ha ordenado a Su Ministro que me prevenga que, fiel a los principios políticos que Ella sigue de concierto con Sus Aliados, Ella no podrá en ningún caso recibir ante sí ningún agente cualquiera, sea de la Regencia de Colombia, sea de alguno de los otros gobiernos de hecho que deben su existencia a los acontecimientos de que ha sido teatro el nuevo mundo desde hace algunos años” (Manning, 1932: 2232, T. III).

El 2 de diciembre de 1823 Monroe envió un mensaje en el que se insertaban dos párrafos que son los que se conocen ahora como Doctrina Monroe. El primero de ellos se vinculaba a las pretensiones rusas en la costa noroeste de América del Norte; el segundo se refería al problema de la intervención europea en América:

“(...) por lo tanto debemos declarar en razón de la sinceridad y de las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y esas potencias, que consideramos como peligroso para nuestra paz y seguridad cualquier propósito por parte de aquéllas por extender sus sistemas a una porción cualquiera de este hemisferio. (...) por lo tanto, es igualmente imposible que contemplemos semejante intervención con indiferencia” (Manning, 1932: 252, T. I).

Las consecuencias inmediatas de este mensaje fueron prácticamente nulas, ya que el peligro de intervención, que nunca fue evidente, ya había pasado por los efectos de la declaración que había realizado Canning en el mes de octubre del mismo año.

VII.

El 26 de diciembre de 1823, Fernando VII, con el apoyo del ministro francés Chateaubriand, invitó a Austria, Rusia, Inglaterra, Francia y Prusia a celebrar una conferencia en París con el propósito de que las potencias pudieran “ayudar a la España al arreglo de los negocios en los lugares de América sublevados”. Agregaba que se debía tratar “sobre las relaciones que durante los desórdenes se han formado con las naciones comerciales”.

Al mismo tiempo, el conde de Ofalia prevenía a Inglaterra sobre el peligro que su poderío económico correría en caso de separarse definitivamente las colonias de España, pues según él, gran parte de estos territorios caerían bajo el poder de los Estados Unidos. Quería, también, conseguir el asentimiento inglés para intervenir en América con tropas extranjeras que actuarían como auxiliares (Webster, 1944: 547-548).

Inglaterra, sin cuyo apoyo era imposible realizar cualquier intervención, sostenía que toda mediación con las excolonias, no fundada sobre las bases del reconocimiento de la independencia de estos países, sería inútil y que en realidad, y seguía insistiendo en esto, debía ser la misma España quien tomara la delantera en ese sentido y a la brevedad posible, ya que la política inglesa estaba encaminada a conseguir dicho propósito. Inglaterra era categórica: prestaría su mediación sobre la única base del reconocimiento de la independencia de los Estados hispanoamericanos.

Es natural que el gabinete británico, dispuesto ya a llevar esa política hasta los últimos extremos, considerara inútil participar en las conferencias que se proponían. Su posición estaba firmemente tomada. Concurrir a París entrañaba la de tener que repetir cosas dichas ya hasta el cansancio. No deseaba, por otra parte,

asistir a la conferencia ante el temor de que ello hiciera pensar que aún no tenía opinión definitiva acerca del problema colonial (Webster, 1944: 540-544). España lamentó profundamente la negativa inglesa a participar en la conferencia, pues ella auguraba el fracaso de la reunión.

Pese a la negativa inglesa, España ante las respuestas afirmativas de Francia, Austria, Prusia y Rusia, persistió en la idea de llevar adelante la conferencia de París. Esta posición española quizás fuera alentada por el hecho de que las potencias no le daban una respuesta terminante, ya que su política así lo requería (Manning, 1932: 572, T. II), pero desde diciembre de 1823 no era de esperarse que le prestaran su apoyo debido fundamentalmente a la intransigencia española y a la firme postura de Inglaterra.

Ante la firme decisión de España de intervenir en América y convencida Inglaterra de que sus conveniencias no se verían satisfechas por aquélla y que nada sacaría de nuevas tratativas, decidió, en diciembre de 1824, reconocer a varios de los nuevos estados. El 31, Canning hizo conocer a los embajadores europeos la determinación inglesa y al día siguiente, 1 de enero de 1825 se hizo efectivo el reconocimiento de Méjico, Colombia y Buenos Aires, postergándose el de Chile, por carecer de informes suficientes, y el de Perú, donde se creía que aún seguía la lucha (Webster, 1944: 572) ya que por razones de distancia, en Europa no se tenía noticias de la derrota definitiva de España en Ayacucho ocurrida el 6 de diciembre de 1824.

Las consecuencias económicas de esta política para Inglaterra fueron inmediatas. El comercio cobró nuevos ímpetus, y tanto las empresas económicas como financieras alcanzaron niveles insospechados. Según Rush que fue testigo de esto "(...) nada fue jamás así, ni siquiera en los días del proyecto del mar del sur. Los valores públicos de esos estados suben y las compañías mineras que en Londres se han formado bajo sus auspicios han llegado a ser grandes objetos de atención para los hombres de dinero, por quienes hasta los mismos fondos británicos han sido por ahora desdeñados".

Este inusitado desarrollo se hizo visible también en las exportaciones destinadas a América Latina. En 1824 el total exportado ascendió a £ 8.696.246; al siguiente año, la cifra alcanzaba a £ 9.178.079. El mayor aumento se experimentó en las exportaciones al Brasil, que ascendieron de £ 3.656.391 en 1824 y a £ 4.116.130 en 1825, seguido por las destinadas a Méjico que pasaron de £ 480.477 a £ 1.160.770 respectivamente (Humpreys, 1940: 237-348).

El reconocimiento británico sorprendió, en cierta manera, al gobierno español, por considerarlo inoportuno y atentatorio a los principios de legitimidad. Enten-

día, además, que no se podía censurar a España haber rechazado la mediación interpuesta por Inglaterra, ya que se había ofrecido sobre bases inaceptables, como era la de renunciar a sus derechos de soberanía en América.

La declaración hecha por Canning el año anterior, de que Gran Bretaña no podía dilatar por mayor tiempo el reconocimiento a los gobiernos americanos, no había preparado a los soberanos europeos para la actitud que tendrían que adoptar cuando esto sucediera.

Por eso, el reconocimiento produjo entre los agentes diplomáticos sorpresa y desaprobación, calificándolo de inesperado, inoportuno y temerario. Los países de la Santa Alianza protestaron, y su política se encaminó, entonces, a evitar que las naciones continentales siguieran los pasos de Inglaterra.

En Francia, el sector de comerciantes y fabricantes se inclinaba a favor del reconocimiento, ya que esperaban sacar pingües beneficios del intercambio con Hispanoamérica y Haití. Precisamente en Francia desde hacía tiempo se estudiaban las ventajas económicas que podían reportar el reconocimiento de la independencia de Haití. Eran sostenidos en sus opiniones por la prensa liberal, que atacaba a los ministros acusándolos de haber permitido a los Estados Unidos e Inglaterra dividirse el valioso comercio americano con la completa exclusión francesa.

El rey de Holanda envió en enero de 1825 agentes comerciales a algunos países, y en Francia se esperaba que el rey de Suecia adoptara la misma actitud.

Rusia, que seguía sosteniendo el principio de legitimidad, desaprobó el reconocimiento realizado por Inglaterra. A su vez, aconsejó a España que formulara una protesta en términos moderados –cosa, por otra parte, que este país ya había hecho– y que declarara de inmediato la libertad de comercio, no como consecuencia forzada por la declaración inglesa, sino como el cumplimiento de una promesa formalmente realizada en 1824.

Rusia, sin duda, comprendió que luego de la declaración inglesa poco se podía realizar en favor de España. En consecuencia, se decidió a apoyar el plan de los Estados Unidos con respecto a Cuba y a Santo Domingo en el sentido de que estas dos islas debían seguir bajo el dominio español. Completando el plan ofrecía su mediación con el propósito de finalizar la guerra. Los Estados Unidos habían abandonado por inoportuno el sueño de apoderarse de Cuba, que postergaba para mejor momento, pero quería asegurarse de que ninguna otra nación ocuparía la isla.

Descontando el apoyo de los gabinetes europeos, los Estados Unidos y Rusia se comprometían a evitar una invasión a las islas por parte de México o de Colombia,

o de ambas unidas, y por lo tanto que se convirtieran en parte dependiente de aquellos países. Pero era necesario que España finalizara la guerra; de otra forma, el ataque a las islas constituiría una operación de guerra legítima, y los Estados Unidos, continuando con su clásica política, se verían obligados a permanecer neutrales. Mientras la misión de este país sería la de frenar cualquier intento de invasión a Cuba, el emperador debía aconsejar a España que finalizara la guerra. La primera y mayor resistencia que había que quebrar era la del Gabinete español, opuesto todo él a la independencia americana. Middleton era de la opinión (8 de septiembre de 1825) que Rusia mediaría entre España y América y que la mediación, apoyada por algunos amigos del Rey de España, sería aceptada.

Se puede concluir entonces que fueron varios los hechos que se deben destacar a partir de la fecha del reconocimiento británico de la independencia de algunos países hispanoamericanos (1 de enero de 1825) acto que marcó el fin definitivo del ejercicio de policía que detentaba la Santa Alianza. Así, las naciones europeas debieron, desde ese instante, tomar en cuenta a Hispanoamérica como una nueva fuerza que no podían ya ignorar debido al enorme capital humano y económico que aportaba al mundo occidental. A su vez los europeos se vieron obligados a seguir a Inglaterra para no quedar violentamente desplazados del pingüe comercio americano. Así Francia, luego del reconocimiento de la independencia del Brasil por parte de Portugal, firmó con el nuevo Estado americano (1825) un tratado de comercio. En 1826, Prusia envió agentes comerciales a Méjico y según manifestaba el ministro prusiano en Rusia, Barón de Maltzahn, “si el Gobierno prusiano no daba más avanzados y decididos pasos hacia un reconocimiento perfecto de la independencia mexicana, era sólo porque se lo impedían sus relaciones y compromisos con España y la Alianza” (Webster, 1944: 265, 403, T. II). Por su parte, los Estados Unidos e Inglaterra habían actuado, en cierta manera, juntos durante el periodo de las guerras de la independencia hispanoamericana. Sus intereses como potencias marítimas, con respecto a Sudamérica, fueron los mismos, esto es, el afianzamiento del libre comercio. Actuaron así hasta 1823, fecha en que la intervención de Inglaterra, seguida por la de los Estados Unidos ahuyentaron el “peligro” de intervención europea. Pero cuando se logró este propósito, se inició el desentendimiento entre ambos. Inglaterra, convertida en una gran potencia industrial, comenzó a desplazar al país del norte del mercado latinoamericano. La primera podía ofrecer mucho más que el segundo que aún no había superado la etapa del capitalismo comercial.

Londres, por su parte, había llegado a ser la primera plaza financiera del mundo y a ella concurrían los países de Sudamérica para abastecerse del tan necesitado dinero. Chile inició la marcha de los empréstitos; efectivamente, el 18 de mayo de 1822, Antonio José de Irisarri contrató uno por £ 1.000.000 con la casa Hulett. Fue seguido entre otros por Perú, el 11 de octubre de ese año, que consiguió uno de

£ 1.200.000 por intermedio de sir Thomas Kinder. Brasil contrató con la casa Rotschild, en 1823, dos por un valor total de £ 3.000.000. En 1824, la casa Herring, Graham y Powles otorgaron el 19 de abril uno a Colombia por un valor de £ 4.750.000, con un descuento inicial del 15 (Donoso, 1934: 116; Cortesao, 1956: 615; Bermúdez, 1937: 234). A su vez, el 1 de julio de 1824, el gobierno de Buenos Aires celebró el contrato con la casa Baring de Londres por la cantidad de £ 1.000.000 (3). El comercio y la banca británica se fueron expandiendo rápidamente por Hispanoamérica, y las naciones, que habían conseguido con tremenda lucha la independencia política, comenzaban a perder su independencia económica.

VIII. Bibliografía

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Sevilla: Sección IX, Legajo 16 N° 937.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, La Plata: Sección Legislatura, 1825.

BELGRANO, Mario (1962a). “La política externa de los Estados de Europa (1813-1816)”, en: Academia Nacional de la Historia, *Historia de la Nación Argentina*, t. VI, vol. 1. Buenos Aires: El Ateneo.

— (1962b). “La Santa Alianza. Los comisionados al exterior”, en: Academia Nacional de la Historia, *Historia de la Nación Argentina*, t. VI, vol. 1. Buenos Aires: El Ateneo.

BERMÚDEZ, José Alejandro (1937). *Compendio de Historia de Colombia*. Bogotá: Cromos.

BRAKENRIDGE, Henry M. (1927). *La independencia argentina*. Buenos Aires: Rosso.

CORTESAO, Jaime y CALMÓN, Pedro (1956). “Brasil”, en: *Historia de América*. Barcelona: Salvat Editores.

CRAINE, Eugene R. (1961). *The United States and the Independence of Buenos Aires*. Topeka: The State Printing Plant.

CRESON, W. P. (1957). *James Monroe*. Buenos Aires: Bell.

HUMPREYS, A. A. (1940). *British Consular Reports on the Trade and Politics of Latin America*. London: Offices of the Royal Historical Society.

(3) Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Sección Legislatura: Doc. 313 y ss.

KOSSOK, Manfred (1965). *La Santa Alianza y la política de los Estados Alemanes ante la emancipación Latinoamericana*. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias.

MANNING, William R. (1932). *Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la independencia de las naciones Latinoamericanas*. Buenos Aires: La Facultad.

MOWAT, R. B. (1927). *A History of European Diplomacy (1815-1914)*. London: Edward Arnold Co.

PUEYRREDÓN, Carlos A. (1962). "Gestiones diplomáticas en América (1815-1817)" en: Academia Nacional de la Historia. *Historia de la Nación Argentina*, t. VI, vol. 1. Buenos Aires: El Ateneo.

WEBSTER, C. K. (1944). *Gran Bretaña y la independencia de América Latina*. Buenos Aires: Guillermo Kraft Ltda.